Naciones Unidas
Oficina contra
la Droga y el Delito

NACIONES UNIDAS
DERECHOS HUMANOS
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

PNUD

Informe Global de Progreso

sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16

América Latina y el Caribe

Indicadores sobre sociedades pacíficas, justas e inclusivas



Serie de Síntesis Regionales 1

Descargos de responsabilidad:
El contenido de este informe de ninguna manera refleja las opiniones o políticas del PNUD, la UNODC, la ACNUDH ni de las organizaciones contribuyentes, ni implica ningún tipo de respaldo. Las denominaciones empleadas y la presentación del material en este informe no implican la expresión de opinión alguna por parte de estas agencias respecto a la condición jurídica de ningún país, territorio o ciudad, ni de sus autoridades, ni respecto a la delimitación de sus fronteras o límites.
Este informe puede reproducirse total o parcialmente y en cualquier forma para fines educativos o sin ánimo de lucro sin necesidad de permiso especial del titular de los derechos de autor, siempre que se reconozca la fuente. El PNUD, la UNODC y la ACNUDH agradecerían recibir una copia de cualquier publicación que utilice este informe como fuente.

Portada, diseño y producción: Faton Turkaj y Eline Naess.
Traducción: Esta es una traducción no oficial preparada con el apoyo de IA y no ha sido sometida a una traducción o verificación formal por parte de las Naciones Unidas.

Cita sugerida:
UNDP, UNODC and OHCHR (2026). Global Progress Report on Sustainable Development Goal 16: Indicators on Peaceful, Just and Inclusive Societies. Latin America and the Caribbean. Regional Snapshot Series, number 1.

Contactos:
ACNUDH: OHCHR-SDGindicators@un.org; **PNUD:** sdg16indicators@undp.org;
UNODC: unodc-dass@un.org.

Agradecimiento:
Este informe fue preparado conjuntamente por el Centro Global de Políticas para la Gobernanza (GPCG) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); la Unidad de Estadísticas de Derechos Humanos del Centro de Innovación y Análisis de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); y la Sección de Datos, Analítica y Estadísticas (DASS) de la División de Investigación y Análisis de Tendencias de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Un agradecimiento especial a Stephen Okiya por su excelente apoyo en el análisis de datos.
Los análisis de los indicadores y las secciones correspondientes de este informe fueron elaborados por estas tres agencias, además de las otras agencias custodias responsables de apoyar y coordinar la recopilación y el reporte de datos globales para los indicadores del Objetivo 16. Se extiende un agradecimiento particular a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Unión Interparlamentaria (UIP), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO-UIS), la Oficina de Financiación para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (FSDO), la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (UNODA) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Se reconoce con agradecimiento la invaluable labor de otras agencias responsables de producir y recopilar estos indicadores, así como otros datos utilizados en el informe: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el programa de Evaluación del Gasto Público y la Responsabilidad Financiera (PEFA), el Grupo del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los autores también reconocen la labor de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas (UNSD) del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA) por su función en la compilación, difusión y presentación de informes sobre los indicadores globales de los ODS.

Copyright © UNDP, UNODC and OHCHR 2026. All rights reserved.

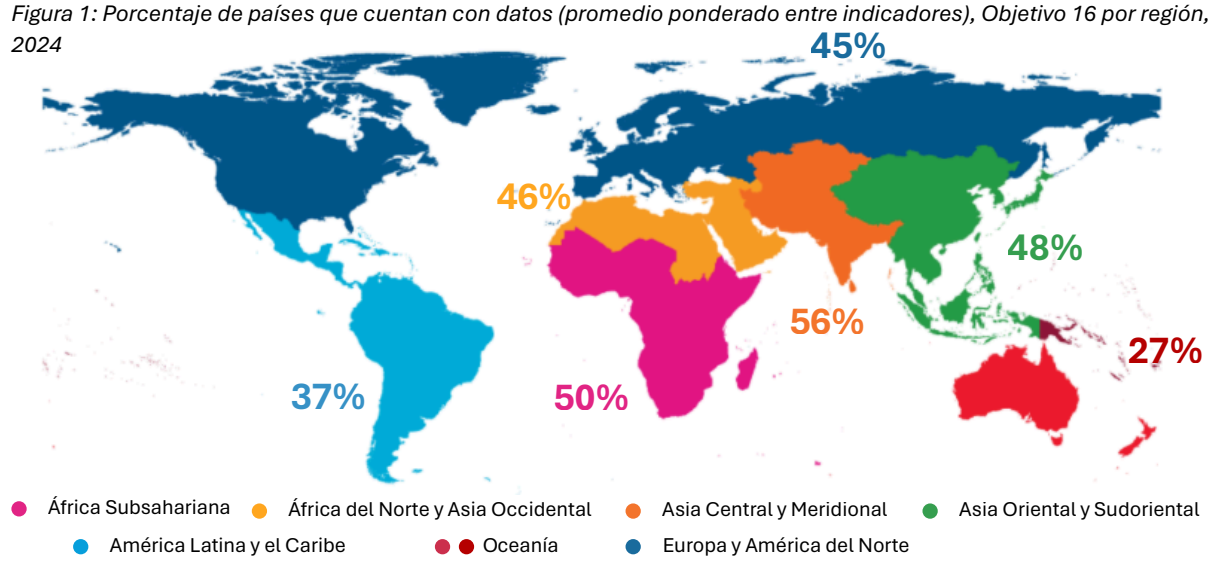
Introducción

Esta Síntesis Regional presenta los datos y la evidencia más reciente sobre los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS 16) en América Latina y el Caribe. Es la primera de la Serie de Síntesis Regionales y ofrece una visión general y concisa de la disponibilidad de datos, de los avances en la región y, cuando es posible, en sus subregiones. Incluye todos los indicadores con datos disponibles y está diseñada para complementar el análisis más amplio y el seguimiento del ODS realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).[1] La Síntesis Regional ofrece un examen centrado en la gobernanza, la paz, la justicia y la inclusión, dimensiones fundamentales del desarrollo sostenible. Más allá de mostrar la disponibilidad de datos, esta Síntesis tiene como objetivo destacar los avances, identificar las brechas persistentes de datos e informar los esfuerzos en curso para fortalecer las estadísticas del Objetivo 16 en toda la región.

Alineada con el Informe Global de Progreso sobre el ODS 16: Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas, esta Síntesis sigue la misma estructura, agrupación de indicadores y enfoque metodológico, incluidas las fuentes de datos y las definiciones.

A pesar de los avances notables en los últimos años, el Objetivo 16 sigue figurando entre los Objetivos con menor disponibilidad de datos, tanto en términos de cobertura geográfica como temporal. Para septiembre del 2025, sólo el 55,9 % de los 193 Estados Miembros tenía datos sobre el Objetivo 16.[2] En este contexto, la región de América Latina y el Caribe[3] se destaca por tener la segunda menor disponibilidad de datos a nivel mundial, solo por delante de Oceanía, con apenas el 36,9 % de los países de la región que han reportado datos sobre el Objetivo 16 desde 2015. Si bien América Latina y el Caribe continúa enfrentando profundos desafíos relacionados con la violencia, la confianza cívica y la inclusión, la región también demuestra importantes fortalezas: una cultura madura de recopilación de datos de gobernanza, liderazgo en mediciones innovadoras del Objetivo 16, sistemas sólidos de registro civil y avances constantes en integridad y rendición de cuentas institucional. Estos son fundamentos críticos para acelerar el progreso hacia sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

Figura 1: Porcentaje de países que cuentan con datos (promedio ponderado entre indicadores), Objetivo 16 por región, 2015–2024



Fuente: Base de datos de los ODS.

[1] Consulte el Anexo Metodológico para obtener más detalles sobre la disponibilidad de datos y las agrupaciones regionales utilizadas en esta Síntesis.

[2] Promedio ponderado entre indicadores. La disponibilidad de datos se calcula de la siguiente manera: (i) la disponibilidad a nivel de indicador es el promedio entre sus series; (ii) la disponibilidad a nivel de meta es el promedio entre los indicadores correspondientes a esa meta; (iii) la disponibilidad a nivel de objetivo es el promedio entre las metas de ese objetivo; y (iv) la disponibilidad de datos entre regiones solo considera a los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas.

[3] La región está compuesta por 33 países y 19 territorios, para un total de 52 países y territorios. Para obtener más detalles, consulta el Anexo Metodológico, que proporciona la lista completa de países y territorios incluidos en la región de América Latina y el Caribe.

Sociedades pacíficas

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las sociedades pacíficas ocupan un lugar central, reconociendo que la paz es tanto una base como un resultado del desarrollo sostenible. Bajo el Objetivo 16, un conjunto interconectado de indicadores mide cuán seguras, protegidas y resilientes son las sociedades. Los altos niveles de muertes relacionadas con conflictos (16.1.2) o de homicidios (16.1.1) señalan instituciones frágiles y una débil cohesión social. La violencia contra personas defensoras de los derechos humanos (16.10.1) refleja la reducción del espacio cívico, mientras que la violencia en sus diversas formas, ya sea física, psicológica o sexual (16.1.3), incluida la violencia contra la niñez (16.2.1 y 16.2.3) y la violencia de género (16.1.1), erosiona la confianza, la igualdad y la estabilidad dentro de las comunidades y tiene profundas consecuencias socioeconómicas para las sociedades. La trata de personas (16.2.2) expone aún más fallas sistémicas en la protección de los más vulnerables. E incluso cuando la violencia parece baja, el miedo generalizado y las percepciones de inseguridad (16.1.4) debilitan la participación cívica y la cohesión social.

Medir estas dimensiones sigue siendo un desafío. Muchas víctimas nunca denuncian sus experiencias debido al miedo, el estigma o la falta de confianza en las instituciones, lo que deja gran parte de esta realidad oculta en las estadísticas oficiales. Delitos como los homicidios, la violencia contra personas defensoras de los derechos humanos o la trata de personas a menudo no son detectados por las autoridades. Las encuestas de victimización, junto con instrumentos relacionados como las encuestas sobre violencia doméstica, encuestas sobre violencia contra las mujeres y encuestas sobre maltrato y violencia contra la niñez, siguen siendo esenciales para revelar la “cifra oculta” del delito y proporcionar información valiosa sobre las experiencias vividas por las personas.

América Latina y el Caribe destaca por su historia relativamente más larga en la aplicación de este tipo de encuestas y en la recopilación de datos sobre victimización y violencia. Como resultado, la región cuenta con una mayor cobertura de datos sobre homicidios intencionales y algunas formas no letales de delincuencia, como el robo y la agresión física.

Indicadores de los ODS



Homicidios intencionales y muertes durante conflictos

- **16.1.1 (Homicidio intencional)**
- **16.1.2 (Muertes en conflictos)**



La violencia y la amenaza de violencia

- **16.10.1 (Violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos)**
- **16.1.3 (Violencia física, psicológica y sexual)**
- **16.1.4 (Percepción de seguridad)**



Violencia contra niñas y niños

- **16.2.1 (Violencia contra niñas y niños por parte de sus cuidadores)**
- **16.2.3 (Violencia sexual contra niñas y niños)**



Abuso, explotación y trata de personas

- **16.2.2 (Trata de personas)**

Países y territorios de América Latina y el Caribe con datos disponibles

2015 - 2025

(52 países y territorios)



Homicidio intencional
40



Agresión física
13



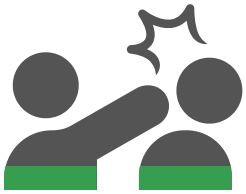
Robo
14



Agresión sexual
6



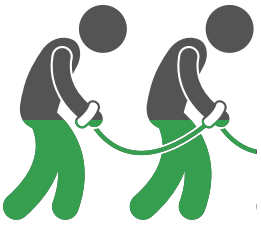
Violencia sexual
3



Violencia física
6



Violencia psicológica
2



Trata de personas
25



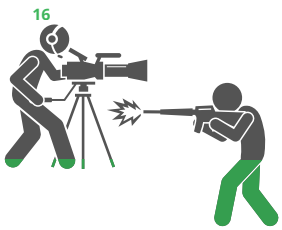
Percepción de seguridad
13



Violencia sexual contra las niñas
11



Disciplina violenta en el hogar (niñas y niños de 1 a 14 años)
16



Asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos
17

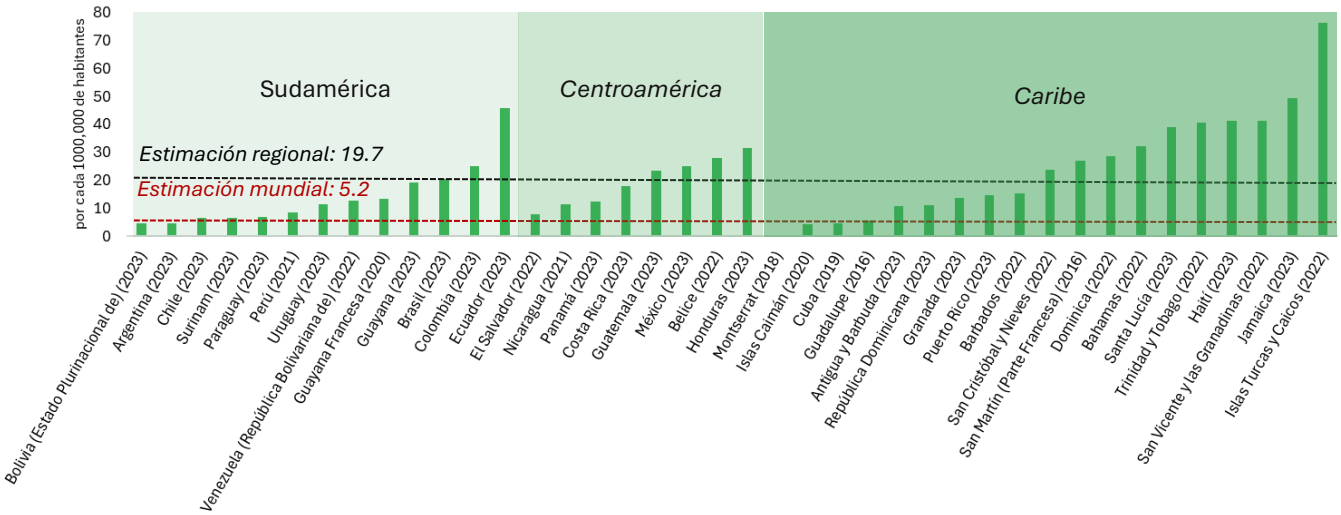
*No hay datos oficiales disponibles sobre muertes relacionadas con conflictos (indicador 16.1.2) para América Latina y el Caribe.

La región con la tasa de homicidios más alta del mundo

América Latina y el Caribe sigue siendo la región más afectada por el crimen organizado y la violencia relacionada con pandillas. También continúa teniendo la tasa de homicidios más alta del mundo, con 19,7 víctimas por cada 100.000 habitantes en 2023, casi cuatro veces el promedio mundial de 5,2. Junto con África Subsahariana, la región con la segunda tasa de homicidios más alta, concentra casi dos tercios de todas las víctimas de homicidio intencional a nivel mundial. Aunque la tasa de homicidios de la región ha disminuido de 22,7 en 2015 a 19,7 en 2023, el nivel de violencia letal sigue siendo alarmantemente alto. La dimensión de género es igualmente marcada en comparación con el promedio mundial: los hombres en la región son asesinados a una tasa de 36,0 por cada 100.000, frente a la tasa mundial de 8,3, mientras que las mujeres enfrentan tasas de homicidio de 4,0 por cada 100.000, casi el doble del promedio mundial de 2,1.[4]



Figura 2: Tasa de homicidio intencional por 100.000 habitantes por país, América Latina y el Caribe, 2023 o último año disponible desde 2015



Fuente: Base de datos de los ODS. Las estimaciones mundiales y regionales se refieren a 2023. En el gráfico solo se incluyen los países con datos disponibles desde 2015.

[4] Global Study on Homicide, United Nations Office on Drugs and Crime, 2023

La región con la segunda tasa más alta de feminicidio

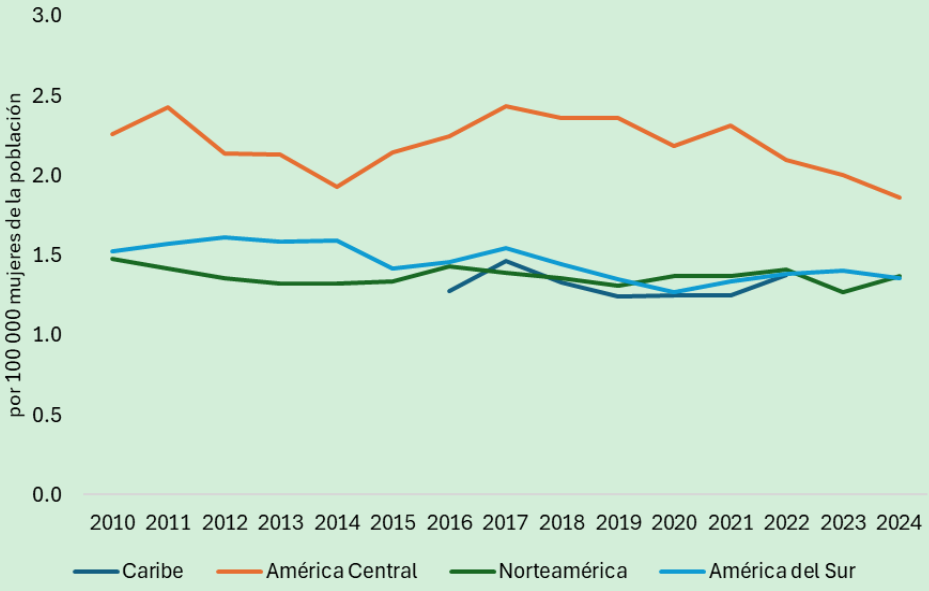


*pareja íntima / miembro de la familia

El feminicidio[5] representa la manifestación más extrema de la violencia de género contra las mujeres y las niñas. En conjunto, las Américas[6] registraron en 2024 la segunda tasa más alta de feminicidios cometidos por parejas íntimas o familiares, con 1,5 víctimas por cada 100.000 habitantes, en comparación con el promedio mundial, que se situó en 1,2 mujeres por cada 100.000 de población femenina. Las estimaciones basadas en los datos disponibles sugieren que, en las Américas, el 69 % de los feminicidios que ocurren en el ámbito privado son perpetrados por parejas íntimas —un patrón similar al observado en Europa. A pesar de algunas fluctuaciones a lo largo del tiempo, la tasa de feminicidios cometidos por parejas íntimas o familiares en las Américas se mantuvo prácticamente igual en 2024 que en 2010. Las tendencias subregionales muestran que esta tasa es consistentemente más alta en América Central que en otras partes de la región.

En 2024, la tasa de feminicidios cometidos por parejas íntimas o familiares fue de 1,9 víctimas por cada 100.000 de población femenina en América Central, en comparación con 1,4 víctimas por cada 100.000 de población femenina en América del Sur y Caribe.[7] Sin embargo, las variaciones anuales observadas en las subregiones aún no son suficientes para indicar una tendencia clara a largo plazo.

Figura 3: Tendencias subregionales en la tasa de feminicidio cometido por pareja íntima o familiar, las Américas (2010–2024)



Fuente: estimaciones de la UNODC basadas en el conjunto de datos de homicidios de la UNODC. UNODC y ONU Mujeres, Feminicidios en 2024: estimaciones mundiales de los feminicidios cometidos por parejas íntimas o familiares, publicación de las Naciones Unidas, 2025.

[5] En esta publicación, el término «feminicidio» se utiliza para referirse a todos los tipos de asesinatos de mujeres y niñas relacionados con el género, tal como se describe en el «Marco estadístico para medir el asesinato de mujeres y niñas por razones de género (también denominado "femicide/feminicide")», elaborado por la UNODC y ONU Mujeres y aprobado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en marzo de 2022.

[6] No se dispone de estimaciones regionales específicas para América Latina y el Caribe. Las tendencias subregionales se muestran en la Figura 3.

[7] La estimación para el Caribe corresponde al año 2022.

Más allá de los titulares: el costo oculto de la violencia no letal

Las formas no letales de violencia - física, sexual o psicológica - dejan cicatrices profundas y duraderas en las personas y las comunidades de toda la región. Su impacto va mucho más allá del daño inmediato, dando lugar a peores resultados en materia de salud y educación, erosionando la confianza social y limitando la participación económica. Sin embargo, los datos sobre este tipo de violencia siguen siendo limitados y fragmentados, lo que dificulta trazar un panorama regional integral. No obstante, la evidencia disponible es preocupante: la prevalencia mediana del robo —una forma de violencia física— en los países de América Latina y el Caribe con datos disponibles es del 4,5%, en comparación con apenas el 0,6% en los países de otras regiones. Los datos sobre agresión física están disponibles únicamente para 13 países, lo que dificulta las comparaciones regionales con las estimaciones mundiales, mientras que la información sobre violencia sexual y psicológica entre adultos sigue siendo demasiado limitada como para extraer conclusiones.

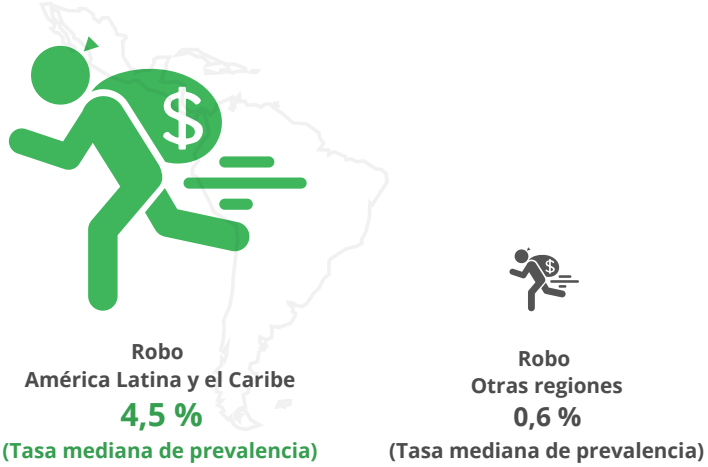
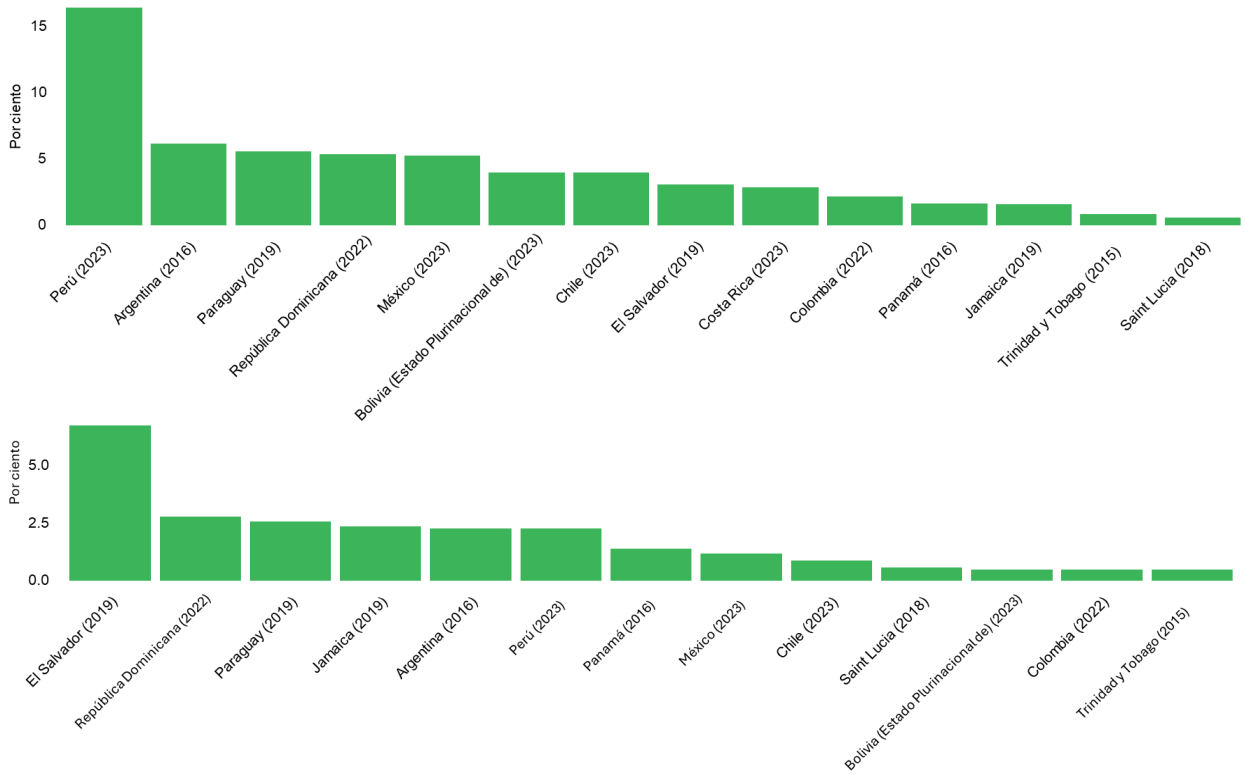


Figura 4: Proporción de la población que fue víctima de robo (gráfico superior) y de agresión física (gráfico inferior) en los doce meses anteriores, países seleccionados de América Latina y el Caribe, último año disponible desde 2015.

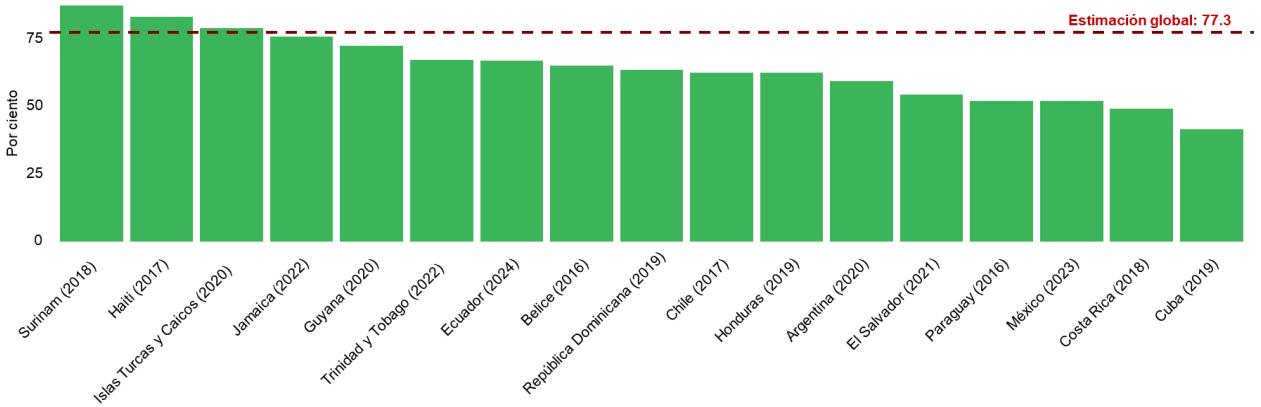


Fuente: Base de datos de los ODS. En el gráfico solo se incluyen los países con datos disponibles desde 2015.

La violencia contra niñas y niños sigue siendo un desafío determinante

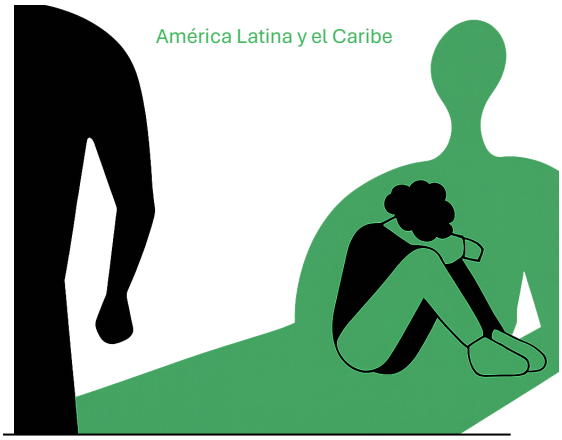
Para muchas personas, la experiencia de la violencia comienza temprano en la vida, dejando marcas profundas que persisten hasta la edad adulta. La «disciplina violenta» en el hogar[8] es la forma más común y extendida de violencia contra los niños. Un amplio conjunto de pruebas confirma que es ineficaz y está asociada a consecuencias negativas, desde impactos inmediatos hasta daños a largo plazo. A nivel mundial, 1.600 millones de niños – es decir, dos de cada tres – soportan regularmente castigos violentos por parte de sus cuidadores en el hogar.[9] En América Latina y el Caribe, algo más de la mitad (51%) de los niños menores de 18 años experimentan castigos violentos por parte de cuidadores en el hogar.[10] En los países donde se dispone de datos, la proporción de niños de 1 a 14 años que experimentaron disciplina violenta en el hogar durante el último mes varió entre el 40% y el 90%.

Figura 5: Proporción de niños de 1 a 14 años que experimentaron castigo físico y/o agresión psicológica por parte de cuidadores en el último mes, América Latina y el Caribe, último año disponible desde 2015



Fuente: Base de datos de los ODS. En el gráfico solo se incluyen los países con datos disponibles desde 2015. La estimación mundial se refiere a 2024.

18% de las mujeres informan haber sufrido violencia sexual con contacto antes de los 18 años



Las primeras estimaciones mundiales sobre la violencia sexual contra las niñas sitúan a América Latina y el Caribe en el tercer lugar a nivel mundial, con un 18 % de las mujeres de 18 años o más que informan haber sufrido violencia sexual con contacto antes de los 18 años, muy por encima del promedio mundial del 12%.[11] Solo Oceanía y África Subsahariana registran niveles de prevalencia más altos.

A pesar de la disponibilidad limitada de datos sobre las distintas formas de violencia entre los grupos de población, la evidencia existente, combinada con tasas persistentemente altas de homicidios y feminicidios, revela una región en la que la violencia, tanto visible como oculta, sigue moldeando la vida cotidiana.

[8] La disciplina violenta por parte de padres y otros cuidadores se refiere a cualquier castigo físico y/o agresión psicológica experimentados en el mes previo a la encuesta. El castigo físico incluye sacudir; golpear o abofetear a un infante en la mano, el brazo o la pierna; golpear en las nalgas u otra parte del cuerpo con un objeto duro; dar palmadas o golpes en las nalgas con la mano desnuda; golpear o abofetear en la cara, la cabeza o las orejas; o golpear o pegar fuerte y repetidamente. La agresión psicológica incluye hablar de forma agresiva, levantar la voz o gritar a un niño, así como llamarlo con nombres ofensivos, como «tonto» o «perezoso».

[9] Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Nota informativa sobre la violencia contra los niños en el hogar, UNICEF, 2025.

[10] Íbid. Cabe señalar que la definición de este indicador difiere en cierta medida de la formulación del indicador ODS 16.2.1, que se refiere únicamente a niñas y niños de 1 a 14 años.

[11] Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Cuando las cifras exigen acción: afrontar la magnitud mundial de la violencia sexual contra los niñas y niños, UNICEF, Nueva York, 2024.

Las niñas y los niños representan casi el 60 % de las víctimas de trata en América Central y el Caribe



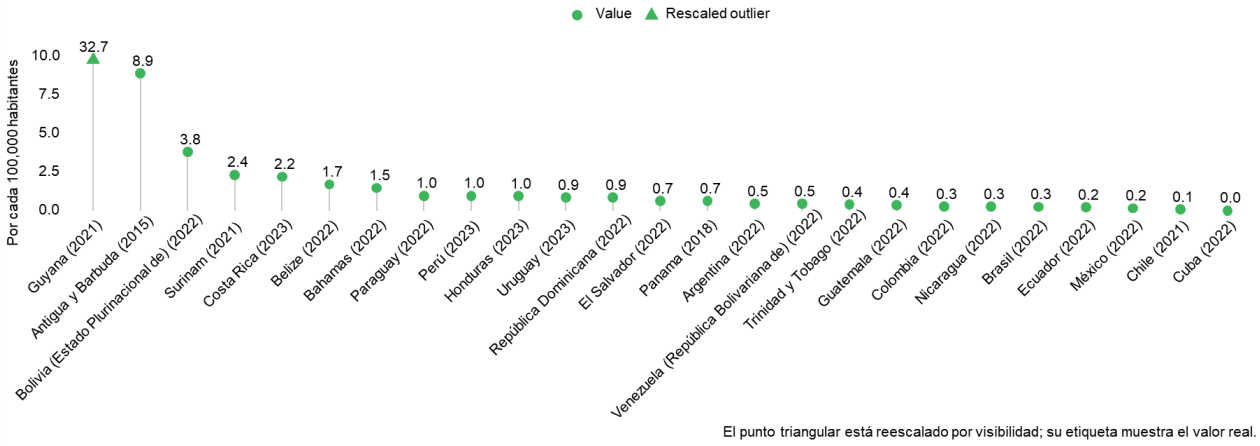
60%

de las víctimas detectadas de trata en América Central y el Caribe son

infantes

A nivel mundial, el 38 % de todas las víctimas de trata detectadas en 2022 eran infantes. Esta proporción de víctimas infantiles es significativamente mayor que el 13% detectado en 2004, cuando comenzó la recopilación de datos a nivel mundial. América Central y el Caribe se encuentran entre las tres regiones (junto con África Subsahariana y África del Norte) que registraron la mayor proporción de infantes sobre el total de víctimas detectadas, alrededor del 60%. Esto contrasta con otras regiones, como Europa y América del Norte, donde la mayoría de las víctimas detectadas son personas adultas.

Figura 6: Víctimas detectadas de trata de personas por cada 100.000 habitantes, América Latina y el Caribe, último año disponible desde 2015



Fuente: Base de datos de los ODS. En el gráfico solo se incluyen los países con datos disponibles desde 2015.
Nota: El valor correspondiente a Guyana (2021) ha sido reescalado para mejorar la comparabilidad visual; los valores originales permanecen sin cambios.

La región con la menor percepción de seguridad



44%

Sentirse seguro al caminar solo por la noche

La paz no se refiere únicamente a la ausencia de violencia; también implica sentirse seguro y protegido en la vida cotidiana. Las percepciones de seguridad están determinadas no solo por las experiencias directas de las personas, sino también por su entorno más amplio, incluidas las vivencias a través de las redes sociales, las noticias y las interacciones comunitarias. En América Latina y el Caribe, estas percepciones revelan una realidad preocupante. Entre 2021 y 2024, solo el 44% de las personas en la región se sentían seguras al caminar solas de noche en su zona de residencia —el nivel más bajo a nivel mundial— en comparación con un promedio mundial del 70%.

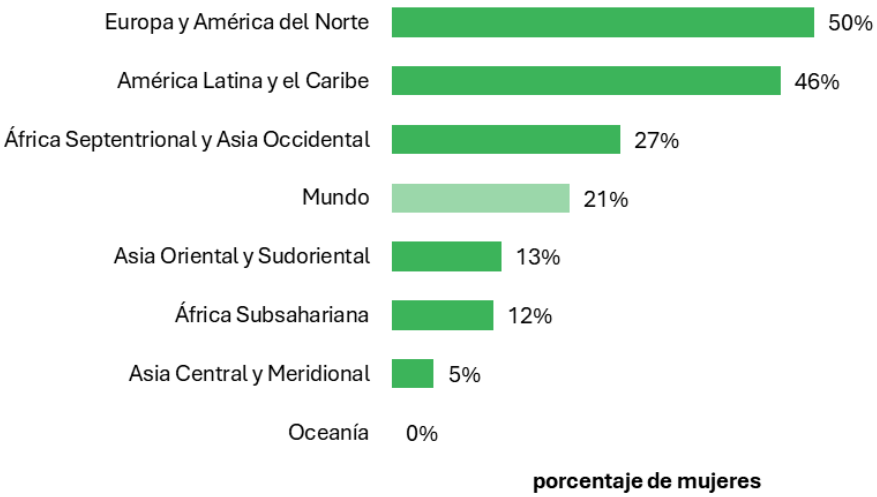
América Latina y el Caribe también es la región donde las mujeres se sienten menos seguras. Sólo el 40% de las mujeres informan sentirse seguras, frente a un promedio mundial del 60%. Estas percepciones, incluso cuando no están directamente vinculadas a experiencias personales de violencia, influyen en el comportamiento social, la movilidad y la confianza pública, configurando la forma en que las personas participan en la vida cotidiana y en los espacios públicos.

Violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos: una amenaza al espacio cívico

En 2024, los ataques contra periodistas, sindicalistas y personas defensoras de los derechos humanos se mantuvieron en niveles alarmantemente altos: en promedio, a nivel mundial, al menos una persona defensora fue asesinada o desapareció cada 14 horas. A nivel global se registraron 502 casos verificados de asesinatos y 123 casos verificados de desapariciones. América Latina y el Caribe destacó como la región más afectada: al menos 260 personas defensoras, incluidas 33 mujeres defensoras, fueron asesinadas en 2024.[12] La proporción de mujeres entre las personas desaparecidas en la región fue del 46% (13 mujeres defensoras de los derechos humanos), mientras que a nivel mundial esta proporción fue del 21%. La región también registró el mayor número de ataques contra personas defensoras del medio ambiente y de los pueblos indígenas. Se registraron detenciones de personas defensoras en al menos 8 países (24%) de los 33 Estados Miembros de la región. De los 14 países del mundo que informaron no haber sufrido ataques graves en 2024, ninguno se encontraba en América Latina y el Caribe.



Figura 7: Porcentaje de personas defensoras de derechos humanos desaparecidas que eran mujeres, 2024, por región



Fuente: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). For more details see: Human Rights Count

[12] Entre los países de la región donde se registraron ataques contra personas defensoras de derechos humanos en 2024.

Sociedades justas

Las Sociedades Justas son un pilar de la Agenda 2030. Esta prioridad reconoce que el Desarrollo Sostenible no se puede lograr sin equidad, igualdad de trato e instituciones que garanticen el estado de derecho. En el marco del Objetivo 16, un conjunto de indicadores interrelacionados capta cómo las instituciones imparten justicia, preservan la integridad, garantizan la equidad y rinden cuentas a las personas a las que sirven. El acceso a la justicia, tanto civil (indicador ODS 16.3.3) como penal (indicadores ODS 16.3.1 y 16.3.2), es un derecho humano fundamental y una medida clave de sociedades justas. Cuando los sistemas de justicia son débiles o inaccesibles, se niega la justicia a las personas, lo que erosiona la confianza y la legitimidad de las instituciones y alimenta la desigualdad. Las instituciones frágiles también facilitan los flujos financieros ilícitos (indicador ODS 16.4.1) y el tráfico de armas (indicador ODS 16.4.2), que socavan la estabilidad y la seguridad. Además, el soborno en las instituciones públicas (indicadores ODS 16.5.1 y 16.5.2) corroe la integridad, distorsiona la prestación de servicios y profundiza la desigualdad. La ausencia de instituciones nacionales independientes de derechos humanos (indicador ODS 16.a.1) debilita aún más la protección de los derechos, permitiendo que persistan los abusos y la impunidad.

En conjunto, estos indicadores ofrecen una imagen multidimensional de los sistemas de justicia y de las instituciones de gobernanza: cuán accesibles, justos y responsables son en la práctica. Su seguimiento a nivel mundial, regional y nacional no solo permite identificar dónde persisten las injusticias, sino que también pone de relieve los avances hacia la construcción de sociedades verdaderamente pacíficas, justas e inclusivas.

Indicadores de los ODS



Estado de derecho y acceso a la justicia

- **16.3.1 (Denuncia de la violencia)**
- **16.3.2 (Personas privadas de libertad sin condena)**
- **16.3.3 (Acceso a la justicia civil y a mecanismos de resolución de disputas)**



Flujos financieros y de armas ilícitos

- **16.4.1 (Flujos financieros ilícitos)**
- **16.4.2 (Flujos de armas ilícitas)**



Corrupción

- **16.5.1 (Prevalencia del soborno en la población)**
- **16.5.2 (Prevalencia del soborno en empresas)**



Instituciones de protección

- **16.a.1 (Instituciones Nacionales Independientes de Derechos Humanos)**

Países y territorios de América Latina y el Caribe con datos disponibles

2015 - 2025

(52 países y territorios)

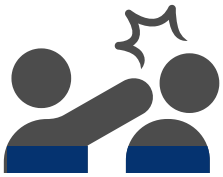
Denuncia de ...



Agresión física
13



Robo
14



Violencia física
7



Violencia sexual
5



Agresión sexual
5



Personas detenidas sin condena
35



Acceso a la justicia civil
3



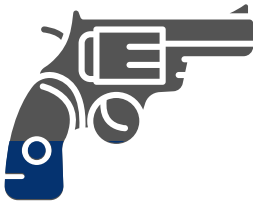
Flujos financieros ilícitos
4



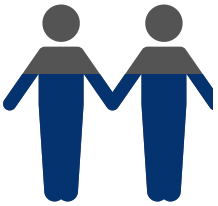
Soborno entre la población
25



Soborno entre las empresas
16

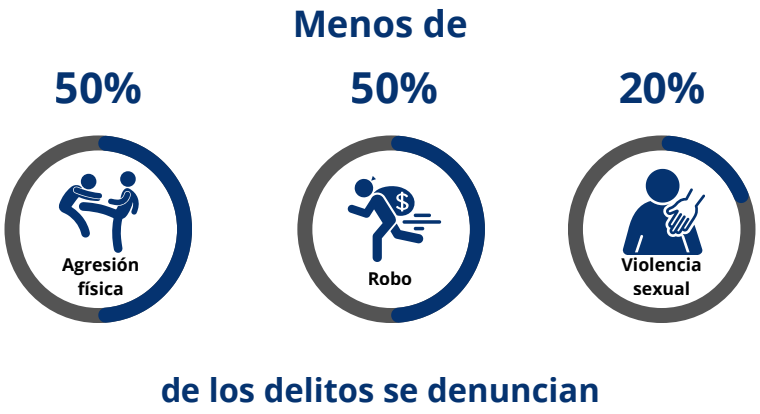


Armas de fuego ilícitas
15



Instituciones de Derechos Humanos
33

El acceso a la justicia penal y civil sigue fuera del alcance de muchas personas en la región

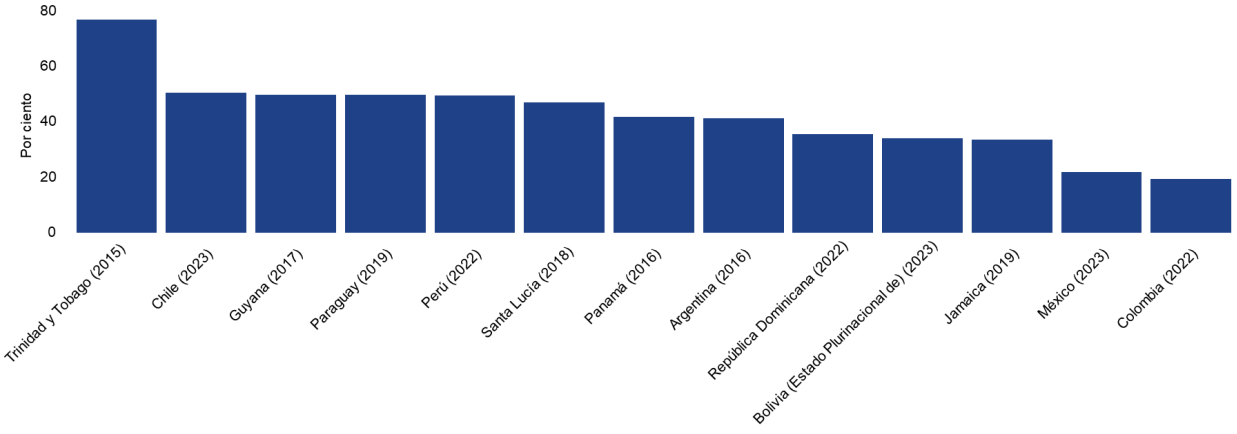


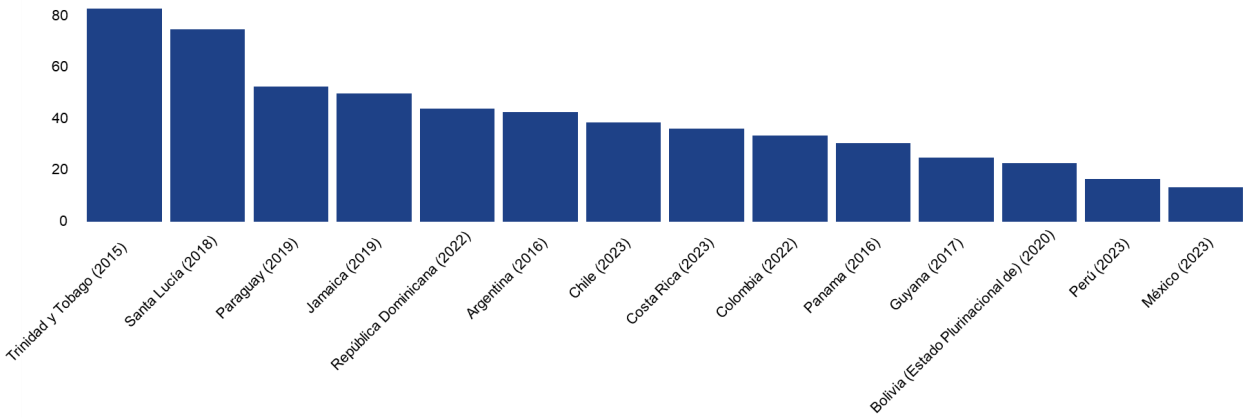
Hasta 2020, el marco de los ODS monitoreaba el acceso a la justicia a través de dos indicadores mundiales centrados en la justicia penal: la denuncia de la victimización (indicador ODS 16.3.1) y la detención preventiva (indicador ODS 16.3.2). Reconociendo la brecha crítica que esto dejaba en la comprensión de la justicia civil, los Estados Miembros introdujeron un nuevo indicador (indicador ODS 16.3.3) para captar la capacidad de las personas de acceder a mecanismos de justicia civil en una amplia gama de controversias.

Denunciar los delitos ante las autoridades competentes es el primer paso para que las víctimas busquen justicia. Sin conocimiento del delito o de la injusticia que las personas están experimentando, las autoridades no llevarán a cabo investigaciones ni administrarán justicia. Más allá de reflejar la confianza de las víctimas en la policía u otras autoridades para proporcionar una reparación efectiva, así como la seguridad de hacerlo, las tasas de denuncia también ayudan a estimar la «cifra oculta» del delito, es decir, la proporción de delitos que no se denuncian.

En América Latina y el Caribe, los datos muestran que, en promedio, menos de la mitad de las víctimas de agresión física o robo denuncian sus experiencias. Las mujeres suelen ser más propensas que los hombres a denunciar la agresión física, aunque los datos desagregados por sexo siguen siendo escasos. La denuncia de violencia sexual es menor, con menos del 20% en promedio en los cinco países con datos disponibles.

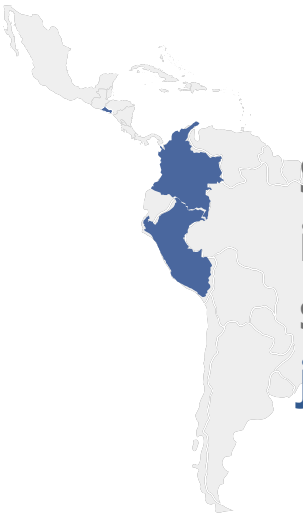
Figura 8: Tasa de denuncia policial de agresión física (gráfico superior) y de robo (gráfico inferior) en los últimos 12 meses, América Latina y el Caribe, últimos datos disponibles desde 2015.





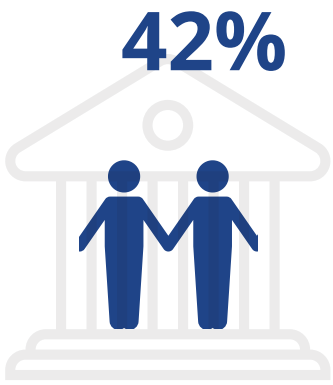
Fuente: Base de datos de los ODS. En el gráfico solo se incluyen los países con datos disponibles desde 2015.

Los datos sobre el acceso a la justicia civil en América Latina y el Caribe siguen siendo escasos. A 2024, solo tres países - Perú, El Salvador y Colombia- han informado sobre este indicador. Allí donde existen datos, la evidencia muestra que una gran proporción de las personas que enfrentan disputas civiles no recurre a ningún mecanismo formal o informal para resolverlas, dejando a muchas sin la justicia que merecen.



Sólo 3 países han informado datos sobre el acceso a la justicia civil

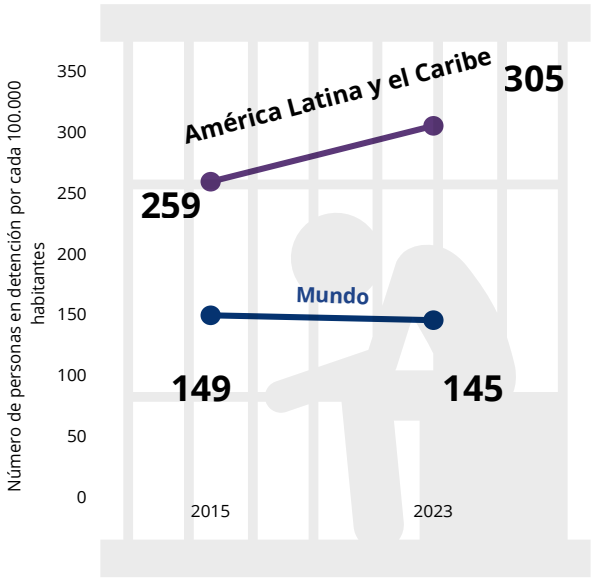
No hay avances en el establecimiento de instituciones de derechos humanos



14 países cuentan con INDH con acreditación de estatus A

El establecimiento de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) independientes es un pilar fundamental de la promoción y protección de los derechos humanos, y un facilitador clave del progreso de los ODS en consonancia con las normas internacionales. En 2024, 89 países en todo el mundo cuentan con una INDH plenamente conforme a los Principios de París. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, el progreso se ha estancado: sólo 14 países (42%) cuentan con acreditación de estatus A, sin mejoras desde 2015. Además, las INDH de Nicaragua, Panamá y Venezuela permanecen en estatus B, habiendo retrocedido desde el estatus A en años anteriores.

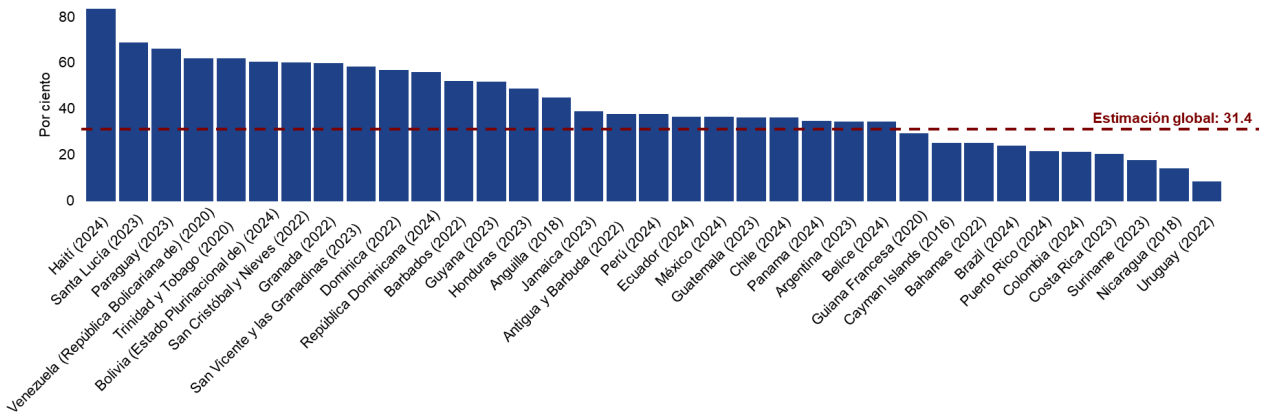
La región con la mayor proporción de personas privadas de libertad en relación con la población



En 2023, se estimó que 11,7 millones de personas se encontraban detenidas en todo el mundo, un 5% más que hace una década. América Latina y el Caribe representaron un tercio de la población penitenciaria mundial.[13] Entre las regiones, la relación de personas privadas de libertad por población varía, registrándose la más alta en ALC, con 305 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. Entre 2015 y 2023, la región experimentó un aumento significativo en la tasa de encarcelamiento, pasando de 259 a 305 personas privadas de libertad por cada 100.000.

De manera alentadora, la proporción de personas detenidas en espera de juicio o sentencia disminuyó en el mismo período, del 41% en 2015 al 30% en 2023, lo que sugiere avances graduales en la reducción de la detención preventiva.

Figura 9: Personas detenidas sin condena como proporción de la población penitenciaria total, América Latina y el Caribe, últimos datos disponibles desde 2015



Fuente: Base de datos de los ODS. En el gráfico solo se incluyen los países con datos disponibles desde 2015.

[13] UNODC, Asuntos Penitenciarios 2025: Población Penitenciaria Mundial y Tendencias; Un Enfoque en Entornos de Rehabilitación (Naciones Unidas, 2025).

Aportes de los Proyectos Piloto sobre Flujos Financieros y de Armas Ilícitos en América Latina

4 **Países con estimaciones de flujos financieros ilícitos**
América Latina y el Caribe



A nivel mundial, los datos sobre los flujos financieros ilícitos (FFI) siguen siendo escasos, aunque la evidencia anecdótica sugiere que pueden ser considerables. Estudios piloto realizados en cuatro países de la región de América Latina —Colombia, Ecuador, México y Perú— arrojan luz sobre la magnitud y diversidad de los FFI. Estos estudios recopilaron datos sobre los mercados ilegales de drogas y sobre actividades delictivas, revelando amplias variaciones determinadas por el contexto de cada país.

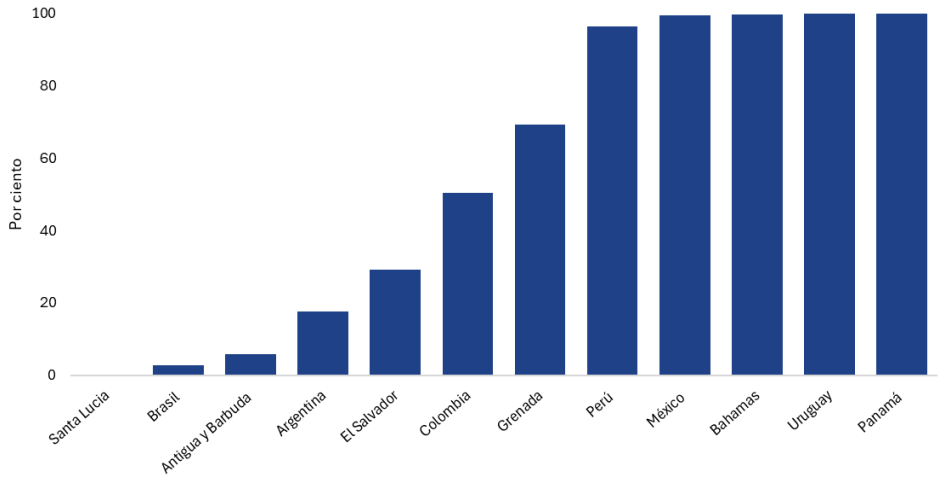
En Colombia, los FFI de entrada se generan tanto por la exportación de cocaína como por la obtención de ingresos de los residentes al participar en la cadena internacional de suministro del tráfico de cocaína. Los flujos de salida se generan mediante la importación de insumos intermedios (principalmente sustancias químicas) necesarios para el proceso de producción.

Ecuador, en gran medida un país de tránsito y de origen de migrantes —muchos de los cuales recurren a servicios de tráfico ilícito—, ha producido estimaciones de FFI vinculadas al tráfico ilícito de migrantes. México registra FFI tanto relacionados con el tráfico ilícito de migrantes como con el narcotráfico, mientras que Perú, el segundo mayor cultivador de arbusto de coca del mundo, presenta estimaciones de FFI principalmente asociadas al tráfico de cocaína.[14]

Determinar el origen o el contexto ilícito de las armas de fuego incautadas, encontradas o entregadas voluntariamente constituye un paso importante para hacer frente a los flujos ilícitos de armas. El rastreo eficaz —medido a través del indicador de los ODS 16.4.2, que identifica cómo y dónde las armas de fuego se desvían del ámbito legal hacia los mercados ilícitos— representa una de las herramientas clave para determinar los vínculos entre los flujos ilícitos de armas y los grupos delictivos organizados. Los niveles de rastreo exitoso varían ampliamente entre regiones y dentro de ellas y están influidos en parte por el volumen de armas incautadas. En los países donde el promedio anual de incautaciones de armas de fuego supera las 10.000 —la mayoría de los cuales se encuentran en América Latina y el Caribe—, la proporción de armas rastreadas con éxito se sitúa por debajo del promedio mundial del 42%. Esta brecha puede reflejar parcialmente los considerables esfuerzos necesarios para establecer el origen o el contexto ilícito de las armas de fuego incautadas, que dependen de mecanismos como las solicitudes de rastreo a registros nacionales y extranjeros o el trabajo de investigación.

[14]Para un análisis en profundidad de los FFI en la región de América Latina y el Caribe, véase: UNODC, Flujos financieros ilícitos relacionados con el delito: avances más recientes (publicación de las Naciones Unidas, 2023).

Figura 10: Proporción de armas incautadas, encontradas o entregadas cuya procedencia o contexto ilícito ha sido rastreado o establecido por una autoridad competente conforme a los instrumentos internacionales, América Latina y el Caribe, promedios bienales calculados sobre los últimos años disponibles, 2016–2023.



Fuente: Base de datos de los ODS. En el gráfico solo se incluyen los países con datos disponibles desde 2015.

El soborno entre la población sigue siendo muy común

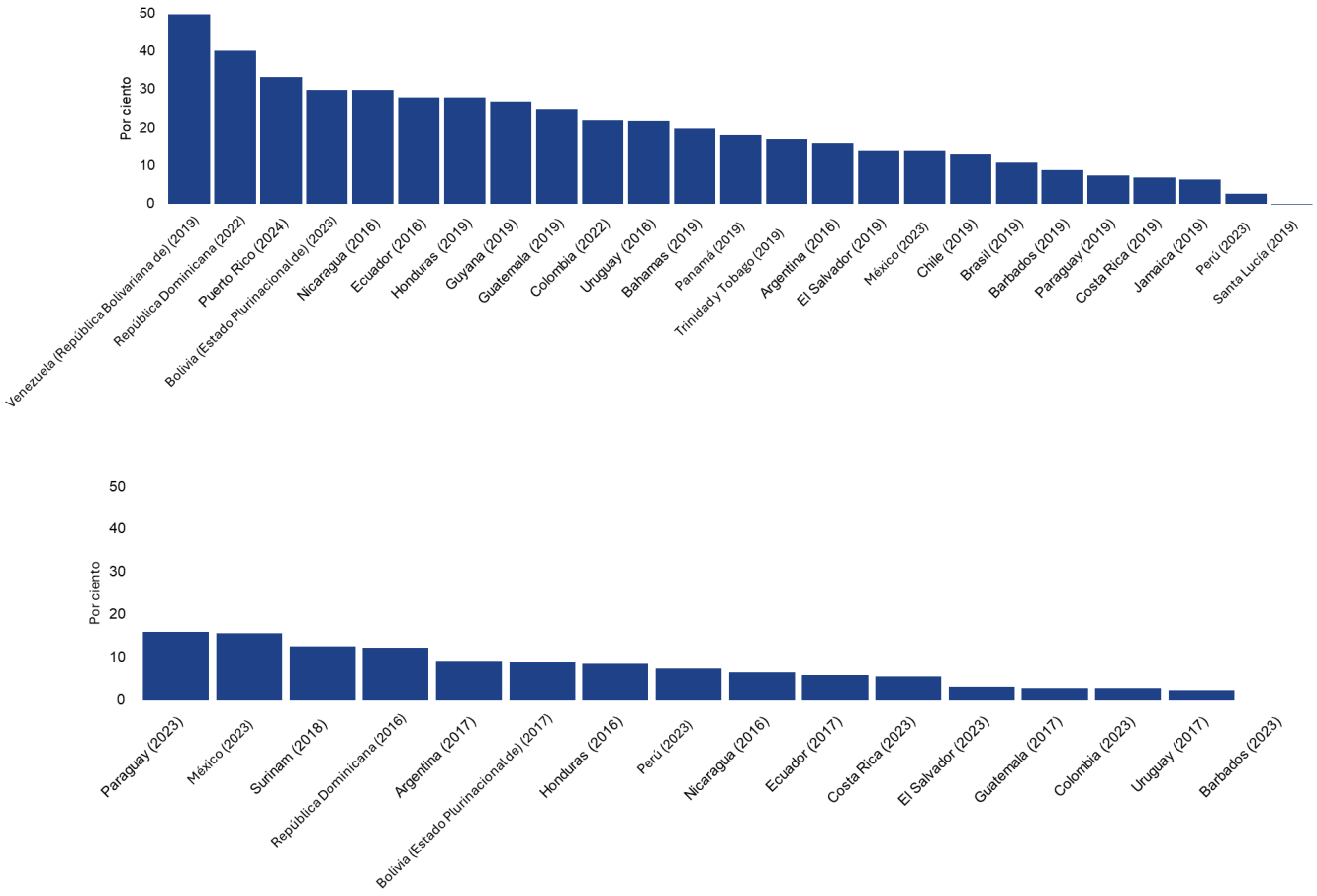
Soborno en la población



Región con la 3ra tasa promedio de prevalencia más alta América Latina y el Caribe

A nivel mundial, 142 países y territorios cuentan con al menos un punto de datos sobre la prevalencia del soborno entre la población desde 2010. América Latina y el Caribe ocupa el tercer lugar en términos de tasa mediana de prevalencia. Una comparación entre el primer punto de datos disponible en el período 2010–2016 y el más reciente en el período 2017–2024 revela una tendencia global estable en la prevalencia del soborno entre la población en general, con una reducción de la tasa mediana de prevalencia en América Latina y el Caribe. El soborno entre las empresas en sus interacciones con funcionarios públicos es menos frecuente que el soborno entre la población, pero sigue siendo un desafío para muchos países de la región.

Figura 11: Prevalencia del soborno entre la población (arriba) y las empresas (abajo), América Latina y el Caribe, últimos datos disponibles desde 2015.



Fuente: Base de datos de los ODS. En el gráfico solo se incluyen los países con datos disponibles desde 2015.

Sociedades inclusivas

El Objetivo 16 también hace seguimiento a los avances hacia la construcción de Sociedades Inclusivas, en las que todas las personas, independientemente de su origen, puedan participar en la toma de decisiones, acceder a los servicios de manera equitativa y tener sus derechos y voces respetados. Los indicadores de este eje muestran cómo las instituciones reflejan, sirven y responden a las personas a las que representan.

La inclusión comienza al nacer, con la identidad jurídica (indicador ODS 16.9.1), que garantiza que todas las personas puedan reclamar sus derechos y acceder a servicios esenciales. Continúa a través de la representación en los órganos legislativos, la función pública y el poder judicial (indicador ODS 16.7.1 a, b y c), que en conjunto miden cuán representados están los distintos grupos de la población en la toma de decisiones y, en última instancia, si pueden influir en los resultados de las políticas. Las percepciones sobre una toma de decisiones inclusiva y receptiva (indicador ODS 16.7.2) añaden otra dimensión al captar si las personas sienten que las instituciones públicas las escuchan y responden a sus preocupaciones.

La inclusión también depende del acceso equitativo a los servicios públicos, a la información y a la protección de los derechos, así como de un trato justo. La satisfacción con los servicios públicos (indicador ODS 16.6.2) refleja las experiencias de las personas al interactuar con el Estado, mientras que la protección contra la discriminación (indicador ODS 16.b.1) garantiza la igualdad de trato y la dignidad para todos. El acceso a la información (indicador ODS 16.10.2) refuerza la transparencia, la rendición de cuentas y la participación cívica, que son los cimientos de una sociedad abierta e inclusiva. A nivel estructural, la inclusión también se extiende más allá de las fronteras nacionales. La representación en las instituciones internacionales (indicador ODS 16.8.1) garantiza que los países cuenten con una voz y un poder de voto equitativos en la toma de decisiones a nivel mundial.

En conjunto, estos indicadores ofrecen una imagen multidimensional de la inclusión. Al mostrar quién participa, quién es atendido y quién es escuchado, iluminan el camino hacia sociedades verdaderamente representativas, receptivas y justas.

Indicadores de los ODS



Toma de decisiones inclusiva

- 16.7.1a (Composición de los órganos legislativos)
- 16.7.1b (Composición de la función pública)
- 16.7.c (Composición del poder judicial)
- 16.7.2 (Violencia política)



Instituciones eficaces y responsables

- 16.6.1 (Gasto público)
- 16.6.2 (Satisfacción con los servicios públicos)



Participación en la toma de decisiones a nivel mundial

- 16.8.1 (Representación en organizaciones internacionales)



Identidad jurídica para todos

- 16.9.1 (Registro de nacimientos)



Protecciones legales para el acceso a la información

- 16.10.2 (Acceso público a la información)



Prevención de la discriminación

- 10.3.1/16.b.1 (Experiencia de discriminación)

Países y territorios de América Latina y el Caribe con datos disponibles

2015 - 2025

(52 países y territorios)



Eficacia política
11



Satisfacción con los servicios públicos
21



Composición de la función pública
5



Composición de los órganos legislativos
46



Composición del poder judicial
5



Acceso público a la información
46



Registro de nacimientos
25



Experiencia de discriminación
16

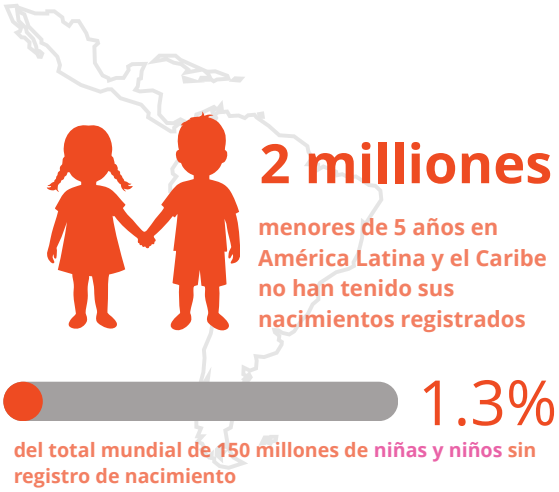


Gasto público
29



Representación en organizaciones internacionales
33

El nacimiento de 2 millones de niñas y niños no está registrado en América Latina y el Caribe

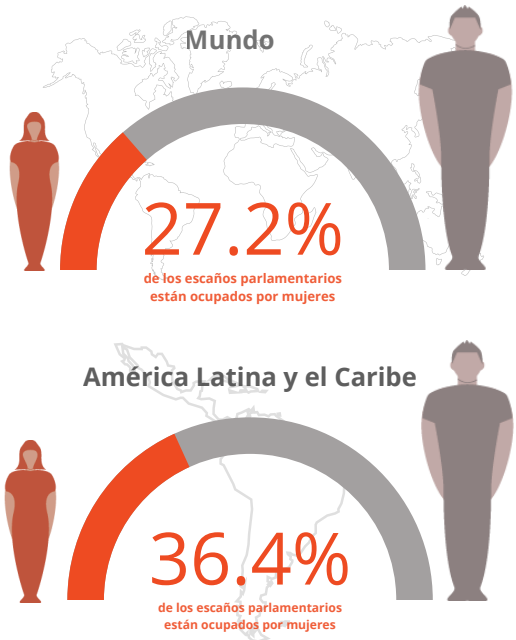


Hoy en día, los nacimientos de casi 8 de cada 10 infantes menores de cinco años —más de 500 millones de niñas y niños en todo el mundo— han sido registrados. Este progreso sostenido marca un importante logro a nivel mundial. Sin embargo, se estima que 150 millones de niñas y niños siguen sin estar registrados, y el avance global se ha desacelerado durante la última década. En América Latina y el Caribe, alrededor de 2 millones de niñas y niños aún "faltan" en los registros oficiales, lo que representa el 1,3 % de todos los infantes no registrados a nivel mundial.[15] Si bien varios países de la región han alcanzado el registro universal de nacimientos, otros continúan situándose apenas por debajo del promedio mundial.

Las brechas persistentes de datos, con solo el 63% de los países de la región que cuentan con información reciente, ponen de relieve la necesidad urgente de un seguimiento más sólido y exhaustivo para captar el panorama completo de la inclusión desde el nacimiento.

América Latina y el Caribe muestra avances significativos para las mujeres en los parlamentos

La inclusión también se refleja en quiénes ocupan posiciones de poder e influencia dentro de las instituciones públicas. El indicador ODS 16.7.1 hace seguimiento a la representación en las instituciones públicas - los órganos legislativos, la función pública y el poder judicial.



Si bien las mujeres y los jóvenes continúan estando subrepresentados en los parlamentos a nivel mundial en relación con su proporción dentro de las poblaciones nacionales elegibles, la región de América Latina y el Caribe se destaca por sus avances. Al 1 de enero de 2025, las mujeres ocupan el 36,4% de los escaños en las cámaras bajas o únicas, muy por encima del promedio mundial del 27,2%. Los jóvenes (de 45 años o menos) representan el 42,8% de los escaños en estas cámaras, superando la cifra mundial del 36%. Estas cifras ponen de relieve tanto los avances de la región como las brechas que aún persisten para alcanzar la paridad de género y una representación inclusiva.

[15]Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, El derecho a un buen comienzo en la vida: niveles y tendencias mundiales del registro de nacimientos. Actualización 2024, UNICEF, Nueva York, 2024.

Las mujeres están subrepresentadas en la función pública y en el poder judicial



Las mujeres también siguen estando subrepresentadas en la función pública y en el poder judicial a nivel mundial, en particular en los niveles superiores donde se toman las decisiones. La evidencia muestra que las mujeres suelen concentrarse en puestos de menor nivel o administrativos, mientras que los hombres dominan los cargos gubernamentales de alto nivel y los tribunales superiores, incluidos los tribunales constitucionales y supremos. En América Latina y el Caribe, las limitaciones de datos dificultan una evaluación completa del equilibrio de género en las instituciones. Solo alrededor del 10% de los países de la región ha informado datos sobre el número de mujeres juezas, y existen datos igualmente limitados sobre la representación de las mujeres en la función pública. Fortalecer la recopilación de datos en estas áreas es esencial para comprender y promover la igualdad en las instituciones de toma de decisiones.

Menos de la mitad de las personas siente que tiene voz en las decisiones del gobierno o que su opinión influye en los resultados de las políticas

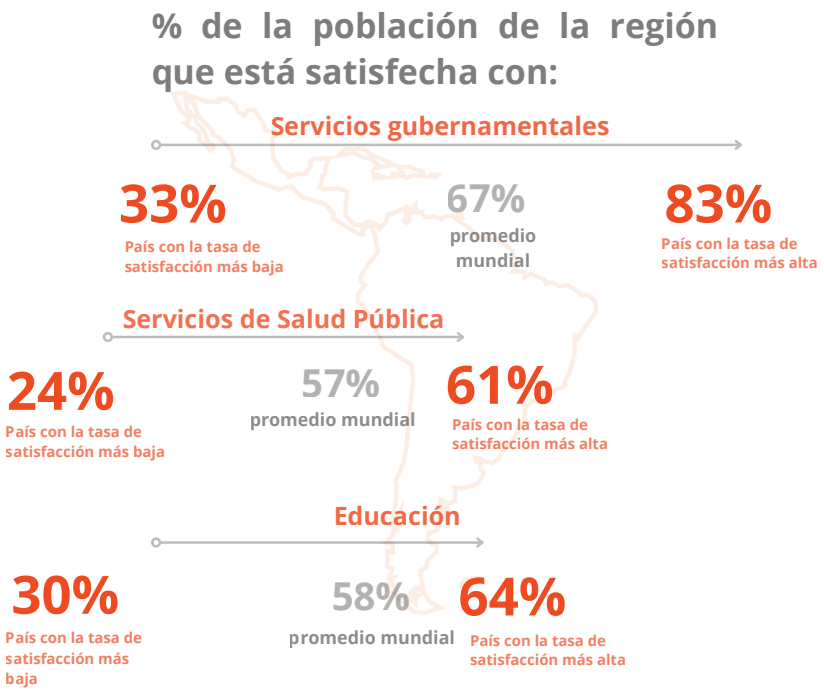
La representación dentro de las instituciones cuenta solo una parte de la historia. La inclusión real también depende de si las personas sienten que sus voces son escuchadas y que su participación importa. Aquí es donde el indicador ODS 16.7.2 aporta información clave. Este indicador mide si las personas sienten que pueden influir en lo que hace el gobierno, utilizando la pregunta: «¿En qué medida diría usted que el sistema político de su país permite que personas como usted tengan voz en lo que hace el gobierno?»



Los datos más recientes disponibles de países de ingresos altos y medios a nivel mundial muestran que, en promedio, menos de la mitad de las personas encuestadas cree que su sistema político les permite influir en las decisiones del gobierno o en los resultados de las políticas públicas. En América Latina y el Caribe, menos de la mitad de la población siente que su voz importa, lo que pone de relieve una desconexión entre la representación institucional y la inclusión percibida. La disponibilidad de datos también sigue siendo limitada, ya que solo alrededor del 24% de los países producen actualmente datos para este indicador. Estos hallazgos subrayan la necesidad de una medición más amplia y regular para captar cómo la ciudadanía experimenta la inclusión en la gobernanza.

Si bien las percepciones sobre la capacidad de las personas para influir en la toma de decisiones reflejan si se sienten escuchadas en estos procesos, la inclusión también depende de cómo las instituciones responden en la práctica a sus necesidades. En este sentido, la satisfacción con los servicios públicos ofrece otra perspectiva clave para evaluar cuán inclusivos y receptivos son realmente los sistemas de gobernanza.

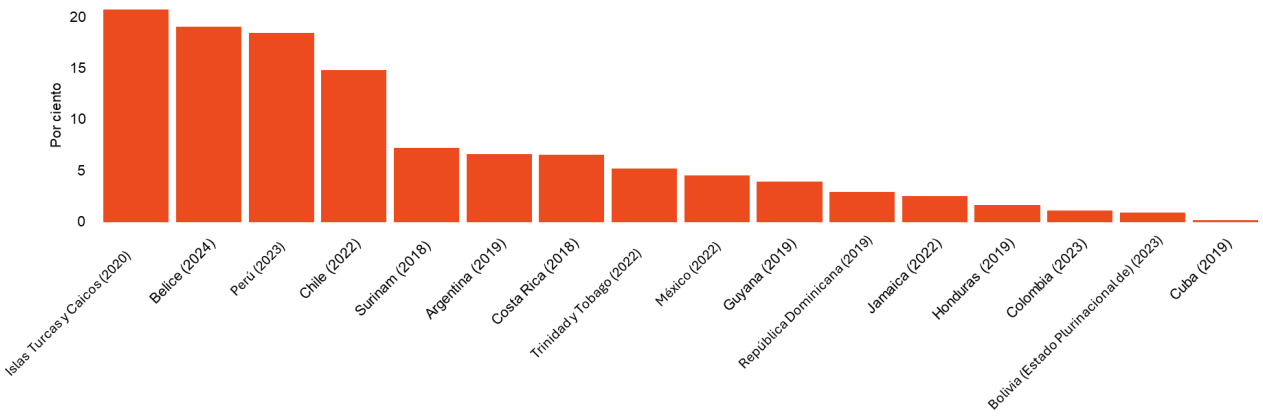
A pesar de que la prestación de servicios es una responsabilidad central de los gobiernos, persisten importantes brechas de datos para medir y monitorear la satisfacción pública con los principales servicios públicos. En promedio, en América Latina y el Caribe, muchos países registran niveles de satisfacción por debajo del promedio mundial, lo que sugiere que el acceso y la calidad siguen siendo desiguales entre países. Esto es particularmente evidente en los servicios de salud, uno de los pocos sectores con una cobertura de datos relativamente mejor. Los niveles de satisfacción en la región varían ampliamente, desde tan solo un 24 % en algunos países hasta un 61% en otros. A pesar de que algunos países de la región presentan niveles de satisfacción cercanos al promedio mundial, una proporción significativa de la población (cerca del 40%) sigue sintiéndose insatisfecha con los servicios de salud que recibe.



La inclusión significativa también implica garantizar que todas las personas sean tratadas con justicia y dignidad en todos los aspectos de la vida. Esto se refleja en el indicador ODS 16.b.1, que se centra en la protección contra la discriminación. A nivel mundial, una de cada cinco personas informa haber sido discriminada por al menos uno de los motivos prohibidos por el derecho internacional en los últimos 12 meses, y la mayoría de los países registra tasas de prevalencia de entre el 13% y el 26%. Sin embargo, los datos para América Latina y el Caribe siguen siendo limitados, ya que solo el 21,7% de los países informa sobre este indicador.

Donde existen datos, los resultados muestran que las experiencias de discriminación en la región oscilan entre tan solo el 3% y hasta el 15%, dependiendo del país y del contexto. Estas variaciones subrayan la importancia de ampliar la recopilación y el análisis de datos para comprender mejor quiénes enfrentan discriminación, por qué motivos y cómo esta afecta su inclusión y participación en la sociedad.

Figura 11: Proporción de la población que informa haber sufrido discriminación, América Latina y el Caribe, últimos datos disponibles desde 2015



Fuente: Base de datos de los ODS. En el gráfico solo se incluyen los países con datos disponibles desde 2015.

Existe un compromiso global creciente con la rendición de cuentas y la transparencia. El indicador ODS 16.10.2 hace seguimiento al número de países que han adoptado garantías legales para el acceso público a la información. A 2024, 139 países contaban con garantías legales para el acceso público a la información. De ellos, 26 se encontraban en América Latina y el Caribe.[16]

América Latina y el Caribe (26)

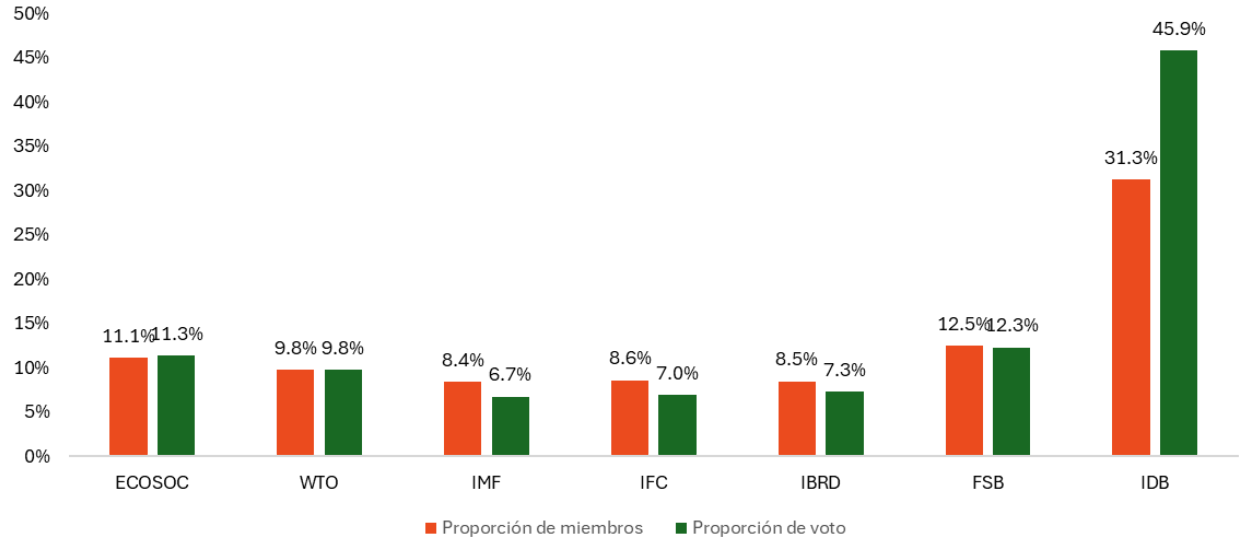
1. *Antigua y Barbuda*
2. *Argentina*
3. *Bahamas*
4. *Belice*
5. *Bolivia (Estado Plurinacional de)*
6. *Brasil*
7. *Chile*
8. *Colombia*
9. *Costa Rica*
10. *República Dominicana*
11. *Ecuador*
12. *El Salvador*
13. *Guatemala*
14. *Guyana*
15. *Honduras*
16. *Jamaica*
17. *México*
18. *Nicaragua*
19. *Panamá*
20. *Paraguay*
1. *Perú*
2. *San Cristóbal y Nieves*
3. *San Vicente y las Granadinas*
4. *Trinidad y Tobago*
5. *Uruguay*
6. *Venezuela (República Bolivariana de)*

Fuente: Órganos de supervisión, acceso a datos y herramientas digitales como elementos esenciales para mejorar el acceso a la información: informe de la UNESCO sobre el acceso público a la información (indicador ODS 16.10.2), 2024

[16]Órganos de supervisión, acceso a datos y herramientas digitales como elementos esenciales para mejorar el acceso a la información: informe de la UNESCO sobre el acceso público a la información (indicador ODS 16.10.2), 2024

A pesar de múltiples rondas de reformas de gobernanza desde principios de la década de 2000, los países de América Latina y el Caribe, al igual que otras regiones en desarrollo, han registrado solo avances limitados en materia de representación. En la mayoría de las principales instituciones financieras internacionales, la proporción de miembros de la región sigue superando su proporción de poder de voto, y este desequilibrio solo ha cambiado de manera marginal desde el año 2000. En el Fondo Monetario Internacional (FMI), la región representa entre el 8% y el 9% de los miembros, pero solo entre el 6% y el 7% del poder de voto, con ajustes modestos entre 2015 y 2024. Un patrón similar de estabilidad se observa en el Grupo del Banco Mundial (en la Corporación Financiera Internacional —CFI— y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento —BIRF—). La representación es comparativamente mayor en el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), con alrededor del 12% al 13%, pero también se ha mantenido en términos generales sin cambios durante dos décadas. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sigue siendo la principal excepción: los países de América Latina y el Caribe concentran alrededor de un tercio de su membresía, pero más del 45% del poder de voto, lo que refleja su mandato regional y su estructura de propiedad.

Figura 13: Participación de América Latina y el Caribe en la membresía y en las cuotas de voto en las principales instituciones financieras internacionales, 2024



Fuente: SDG Database.

Anexo Metodológico

Agrupaciones regionales

Esta Síntesis se centra en América Latina y el Caribe, utilizando las Agrupaciones Regionales de los ODS como base para la cobertura de países. Estas agrupaciones pueden no coincidir completamente con las clasificaciones de países utilizadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La lista completa de los 52 países y territorios incluidos en América Latina y el Caribe y en las demás regiones de los ODS puede consultarse aquí.

Dado que esta Síntesis está diseñada para complementar el Informe Global de Progreso sobre el Objetivo 16, mantener las Agrupaciones Regionales de los ODS garantiza coherencia y permite a los lectores comparar fácilmente los hallazgos de esta región con los presentados para otras regiones en el informe principal.

Acceso a los datos

Todos los datos presentados en esta Síntesis están disponibles públicamente a través de la Base de Datos Global de los ODS. En las notas al pie se proporcionan referencias adicionales a datos detallados y análisis producidos por las respectivas agencias custodias. También puede encontrarse más información en el Informe Global de Progreso sobre el Objetivo 16.

Naciones Unidas
Oficina contra
la Droga y el Delito

NACIONES UNIDAS
DERECHOS HUMANOS
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO

PNUD

Con la colaboración de

Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

unicef
para cada infancia

NACIONES UNIDAS
CEPAL

United Nations | Department of Economic and Social Affairs

World Health Organization

United Nations | Office for Disarmament Affairs

unesco

and from UNCTAD and World Bank